



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE: **Hernando Vargas Cipamocha**
DEMANDADO: **Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia**
RADICACIÓN: 15 001 3333 004 2017 00128 00

I. ASUNTO A RESOLVER

Ingresa el proceso con informe secretarial en el que se señala que la parte demandante, interpuso recurso de reposición en contra del auto que inadmitió la demanda.

1. Providencia recurrida

Mediante auto del siete (7) de septiembre de 2017 (fls. 35-36) se inadmitió el presente medio de control y se concedió a la parte demandante el término de diez (10) días para que subsanara los defectos allí anotados, consistentes en adecuar la demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 164 del C.P.A.C.A., así:

"(...)

El artículo 164 de la ley 1437 de 2011 numeral 2 literal d, dispone:

ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. *La demanda deberá ser presentada:*
(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;..."

En el subexamine se demanda el acto administrativo contenido en el Oficio N° DESTJ15-2206 del 26 de agosto de 2015, la Resolución N° 002772 del 4 de noviembre de 2015 emanados de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Tunja y la Resolución N° 7282 de 1 de noviembre de 2016, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Del último acto administrativo, es decir, la resolución N° 7282 de 1 de noviembre de 2016, no se anexo la constancia de notificación, por lo que se debe requerir a la parte demandante, a fin de que aporte dicha constancia.

(...)

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, se requiere a la parte actora para que allegue la constancia de conciliación extrajudicial, como quiera que en el presente caso, se discute el reconocimiento, reliquidación y pago de acreencias

laborales, que conciernen a derechos inciertos y discutibles. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado¹:

En lo que concierne a las cesantías, parciales o definitivas, también ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación que no se constituye en una prestación periódica, sino unitaria, que, aún cuando su liquidación se realice de manera anual o, excepcionalmente, al retiro del empleado, se agota al momento de la expedición del respectivo acto que las reconozca.

Vistas así las cosas, se muestra evidente que la reclamación de las “prestaciones sociales y cesantías” del demandante, en los términos de su derecho de petición, conciernen a derechos inciertos y discutibles, por lo que, al tenor de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, era exigible el trámite de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior, a fin de verificar el cumplimiento del requisito de procedibilidad del artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

A folio 2 del expediente obra memorial poder suscrito por el actor confiriéndole poder al abogado Joaquín Augusto Bedoya Rodríguez, sin embargo, en el mismo solo se indicó que se demanda el acto administrativo contenido en el Oficio N° DESTJ15-2206 del 26 de agosto de 2015, mientras que en el escrito de la demanda se señala que se pretende la nulidad de las resoluciones N° 002772 del 4 de noviembre de 2015 y N° 7282 de 1 de noviembre de 2016, por lo que el Juzgado se abstendrá por el momento de reconocerle personería jurídica al profesional del derecho citado, porque no cumple con los postulados del artículo 74 del C.G.P.

(...)

2. Fundamentos del recurso de reposición

Mediante recurso de reposición radicado el 12 de septiembre de 2017 (fl. 38) la parte actora solicitó se admita la demanda con fundamento en lo siguiente:

Manifestó que con la demanda se adjuntaron todos los documentos en su poder y en el de su mandante, señalando que la Resolución N° 7282 del 1 de noviembre de 2016, nunca le fue notificada personalmente ni en debida forma como lo establece el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, solicita se dé aplicación a lo previsto en el artículo 72 del CPACA en concordancia con el artículo 301 del Código General del Proceso, y se entienda que la resolución reseñada fue notificada por conducta concluyente el día 10 de agosto de 2017, fecha en la que se radico la demanda.

Aunado a lo anterior, indica que en los casos en los que se demandan actos que reconocen o niegan prestaciones salariales periódicas, que son devengadas por el demandante mientras permanezca en servicio activo, no opera la caducidad, para lo cual trae a colación jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sobre el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, considera que para el caso que nos ocupa, no es obligatorio agotarlo, por cuanto, los derechos salariales son irrenunciables de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Se trata de derechos mínimos, ciertos y adquiridos que no pueden someterse a conciliación.

¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, 9 de abril de 2014, Radicación 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

el artículo 242 del CPACA, toda vez que no existe norma legal en contrario, y que la decisión no es de aquellas que son susceptibles de recurso de apelación. Establecido lo anterior, le corresponde al Despacho determinar si es posible reponer la providencia citada y en consecuencia, ordenar la admisión de la demanda.

Sobre la caducidad hay que señalar que como lo que se pretende con esta demanda, es el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, se debe indicar que como la misma es percibida de forma habitual por el demandante, constituye entonces una prestación periódica, atendiendo los postulados establecidos por el Consejo de Estado, sobre el particular ha dicho:

*"En lo que respecta a que se trata de una reclamación de prestaciones periódicas, la Sala debe precisar que, en efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en señalar que no opera el fenómeno de la caducidad para demandar los actos que reconozcan o nieguen las mismas; sin embargo, al producirse la desvinculación del servicio, se hace un reconocimiento de prestaciones definitivas y, en tal medida, las prestaciones o reconocimientos salariales que periódicamente se reconocían y pagaban, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual o quinquenalmente, dejan de tener el carácter de periódicos, pues ya se ha expedido un acto de reconocimiento definitivo, al momento de finiquitar la relación laboral."*²

Con base en lo anterior, y como el actor se encuentra en servicio activo, ello implica que la todos los haberes que está devengando incluida la bonificación que dispone el Decreto 383 de 2013 son de forma periódica, que dejarán de serlo, una vez se desvincule del servicio de forma definitiva, por lo que bajos esos términos, se configura los parámetros señalados en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 numeral 1º literal c:

Art. 164. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

c) Se dirija contra autos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fé.

Se puede decir entonces, que en el caso que nos ocupa, no opera el fenómeno de la caducidad, ya que, como se ha manifestado previamente el actor se encuentra vinculado actualmente con la Rama Judicial.

Del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, señala el recurrente que como se trata de derechos salariales, estos tienen la naturaleza de irrenunciables y por tanto, no se requiere agotar el requisito en cuestión, al no poder ser conciliables.

El Juzgado considera que precisamente ese el objeto de este medio de control, y es que se le atribuya a la bonificación judicial la condición de factor salarial, con la declaratoria de nulidad de los actos demandados, que han negado dicho pedimento, por lo que no es dable afirmar de antemano que se trata de un derecho salarial, pues, ese es el litigio que cursa en el momento. No obstante lo anterior, a juicio de este Despacho la exigencia de la conciliación prejudicial no puede anteponerse al acceso a la administración de justicia, máxime cuando se discuten derechos laborales, como lo es la inclusión como factor salarial de la bonificación judicial para la liquidación de prestaciones sociales, por lo que no

² Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 19 de enero de 2015, Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00053-01(4434-13).

Como lo que se pretende es el pago del salario en forma completa y en los términos establecidos en la Ley 4 de 1992, la reclamación no puede estar sometida a conciliación como requisito de procedibilidad.

Por último, en lo relacionado a que se aporte un nuevo poder, estima que no es necesario, ya que, el que fue conferido y anexado a la demanda cumple con todos los requisitos para considerarse suficiente, como quiera, que en el mismo se indica la determinación del objeto, la entidad demandada, las pretensiones de la demanda, el medio de control invocado y el acto acusado.

Solicita se reponga la decisión y en su lugar se admita la demanda.

II. CONSIDERACIONES

Previo a resolver de fondo el recurso de reposición que se estudia, el Despacho aclara la procedencia del mismo, sobre el particular, la Ley 1437 de 2011, reguló las providencias sobre las cuales es factible interponer recurso de apelación:

Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

- 1. El que rechace la demanda.*
- 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.*
- 3. El que ponga fin al proceso.*
- 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.*
- 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.*
- 6. El que decreta las nulidades procesales.*
- 7. El que niega la intervención de terceros.*
- 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.*
- 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.*

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

Parágrafo. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.

Como se aprecia, la regulación contenida en la norma en cita, no incluye el auto de inadmisión de la demanda.

Por su parte, el artículo 242 ibídem, regula lo pertinente al recurso de reposición, y establece:

“Artículo 242. Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. “En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

En ese orden, se tiene que el recurso de reposición es procedente i) si no existe norma legal en contrario que prohíba su procedencia y ii) la decisión no debe ser susceptible de los recursos de apelación o de súplica.

Así las cosas, el Despacho encuentra que contra el auto del 7 de septiembre de 2017, que inadmitió la demanda, procede el recurso ordinario de reposición, según lo establecido por

es dable exigir como requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial, por no ser un asunto transigible o negociable susceptible de conciliación.

Finalmente, en cuanto a la negativa de reconocerle personería al abogado Joaquín Augusto Bedoya Rodríguez, el Despacho acoge la postura asumida por el H. Consejo de Estado, que en un caso de características similares, reconoció que a pesar de haber sido otorgado el poder para demandar única y exclusivamente determinado acto, los demás actos demandados guardan relación directa con el primero, por lo que se entiende que el mandato conferido guarda una identidad de objeto, y en esos términos, es dable el reconocimiento de la personería, concretamente dijo:

"No se configura tal ausencia de poder porque si bien el memorial contentivo de la facultad para demandar hace referencia expresa única y exclusivamente a la Resolución No 109 del 21 de noviembre de 2001 "Por medio del a cual se reconoce unas prestaciones sociales a un ex empleado del municipio de la Cumbre Valle", los restantes actos demandados, esto es, Resoluciones No 100 del 23 de octubre de 2001 y 074 de septiembre de 2001, tienen relación directa con el primer acto citado en cuanto también reconocen derechos derivados de la relación laboral a los que igualmente hace mención expresa el memorial poder.

(...)

*La manifestación que en tal sentido hace el poderdante, está indicando su intención clara y concreta de otorgar poder para el reclamo de la totalidad de las acreencias laborales a los que cree tener derecho como consecuencia de la terminación del vínculo laboral que mantuvo con la entidad, sin que sea necesario que se precise el número y fecha del acto o actos demandados."*³

Así las cosas, se evidencia que el poder obrante en el expediente aunque solo se enuncia el acto administrativo contenido en el Oficio DESTJ 15-2206 del 26 de agosto de 2015, en el mismo se señala, que lo que se pretende es que se tenga en cuenta la bonificación judicial prevista en los Decretos 382 y 383 del 6 de marzo de 2013, como factor salarial, por lo que, de acuerdo a lo antes señalado, se le reconocerá personería al abogado Joaquín Augusto Bedoya Rodríguez como apoderado del demandante.

Por lo anterior, se repondrá la decisión adoptada por este Despacho el día 7 de septiembre de 2017, mediante la cual se inadmitió la demanda, y en consecuencia se admitirá la misma y se ordenara su notificación.

Por lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO.- REPONER el auto del 7 de septiembre de 2017, a través del cual se inadmitió la demanda en el proceso de la referencia, por lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, **ADMITIR** la presente demanda de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en primera instancia, instaurada por el abogado **Hernando Vargas Cipamocha**, en contra de la **Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**.

TERCERO.- NOTIFICAR personalmente esta decisión al representante legal de la **Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, a través del correo electrónico registrado en la agenda virtual del Despacho, quien al momento de la

³ Consejo de Estado, Sección Segunda, 15 de mayo de 2009.

notificación o al contestar la demanda, deberá allegar copia auténtica de los documentos que acrediten la representación legal. Se previene a la parte demandada, que al tenor de lo señalado en el numeral 4º y párrafo primero del artículo 175 del C.P.A.C.A., deberá aportar todas las pruebas que se encuentren en su poder y que pretenda hacer valer en el curso de este proceso, además el expediente que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentre en su poder.

CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de esta providencia al señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría del despacho a su disposición.

QUINTO.- NOTIFICAR del contenido de esta providencia a la demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del C.P.A.C.A, esto es, por ESTADO.

SEXTO.- La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de ocho mil quinientos (\$ 8.500.00) M/CTE, que corresponde a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor
Envío de copia de la demanda, anexos y auto admisorio mediante correo certificado establecido en el inciso 6 del art. 199 del C.P.A.C.A. a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.	\$8.500
Total	\$8.500

Dicho valor deberá ser consignado en el Banco Agrario de Colombia, Cuenta No 4-1503-0-21081-1 Convenio N° 13226 y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del C.P.A.C.A, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

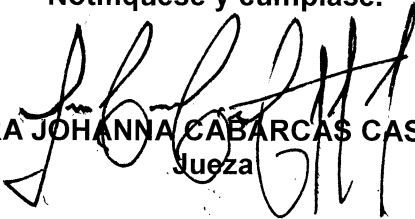
SEPTIMO.- Cumplido lo anterior córrase traslado de la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A, al (los) demandando (s) y al Ministerio Público, por el término de treinta (30) días, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, comenzará a correr veinticinco (25) días después de realizada la última notificación, **para que conteste la demanda y allegue con esta todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer dentro del proceso, así mismo, deberá allegar la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto de éste proceso donde figura como demandante Hernando Vargas Cipamocha identificado con C.C. 19.479.438 y que se encuentren en su poder, la omisión de éste deber constituye FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA** del funcionario (a) encargado del asunto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 175, párrafo primero del C.P.A.C.A. También, deberán allegar copia auténtica de los documentos que acrediten la calidad de representante legal de la entidad o entidades demandadas de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del C.P.A.C.A.

OCTAVO.- RECONOCER personería al abogado Joaquín Augusto Bedoya Rodríguez, identificado con C.C. 19.495.636 y T.P. 116940 del C.S. de la J., como apoderado de la

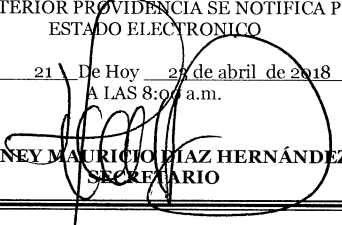
parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido, y que obra a folio 1.

NOVENO- .Hacer los registros pertinentes en el Sistema de Información Judicial.

Notifíquese y cúmplase.


LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Jueza

⁴ps.

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE \ ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRONICO</p> <p>N ° <u>21</u> De Hoy <u>27</u> de abril de 2018 A LAS 8:00 a.m.</p> <p> FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>

⁴ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 23 de abril de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario